

660-CAS-2009

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día catorce de marzo de dos mil once.

Los Suscritos Magistrados conocen del recurso de casación elaborado por el Licenciado, Luis Arturo Magaña Figueroa, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, en el proceso penal instruida contra la imputada **LUZ AMELIA LABRAÑA CARRILLO**, por el delito de **CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS**, tipificado y sancionado en el Art. 5 literal "a" de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico, impugnando la Sentencia Absolutoria, pronunciada por el Juez Especializada de Sentencia de San Miguel, a las siete horas con treinta minutos del día siete de octubre del año dos mil nueve.

Del contenido del escrito, se advierte que el impugnante ha invocado tres motivos de casación: dos de forma, cuales son: **"FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA POR HABERSE OMITIDO LA CONSIDERACIÓN DE PRUEBA DECISIVA INTRODUCIDA EN EL DEBATE Y SER INCONGRUENTE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN Y EL AUTO DE APERTURA"**. (Sic) y **"FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA POR HABERSE INOBSERVADO EN EL FALLO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA CON RESPECTO A MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIO VALOR DECISIVO"**. (Sic). Y uno de fondo, a saber, la **"ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ART. 5 LITERAL "A" DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS"**. (Sic). En consecuencia, habiéndose verificado el cumplimiento de las exigencias formales para su admisibilidad, consecuentemente con fundamento en los Arts. 406, 407, 422 y 423 Pr.Pn., **ADMÍTANSE** los motivos relacionados; y, con base en el Art. 427 Pr.Pn., decídase lo pertinente en sentencia de casación.

RESULTANDO:

I) RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL.

Que en la pertinente el Juez Especializado de Sentencia de San Miguel, resolvió: *"...De conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 20, 72, 74, 75, 172, y 181 de la Constitución de la República de El Salvador; 1, 2, 3, 4, 5, 17, 36, 58, 62, 63, 64, 66, 114, 115 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 5, 17, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 53, 130, 158, 162, 324, 354, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 del Código Procesal Penal; Arts. 4 y 5 de la ley Contra el lavado de Dinero*

y de Activos; Art. I de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja; 3, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 8 9, 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José; 7, 9, 10.1 14, 15 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I, II, XVII XVIII XXV XXVI, XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FALLO: A) ABSUÉLVASE PENAL Y CIVILMENTE a la señora LUZ AMELIA LABRAÑA CARRILLO, par el delito de CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, regulada en el artículo cinco de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONÓMICO, en consecuencia ratifíquese lo regulado en el artículo cuatrocientos cuarenta y tres del Código Procesal Penal en cuanta a la puesta en libertad de la procesada, debiendo casarse toda restricción relativa al presente caso. B) SOBRE LAS CONSECUENCIAS CIVILES SE DETERMINA; I) Devuélvase a la señora Luz Amelia Labraña Carrillo, la cantidad de cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América; así como un pasaporte a su nombre, una cartera pequeña de cuero, color negro, conteniendo en su interior; dos tarjetas Visa, una de crédito BANRURAL y otra de Débito del Banco Industrial y una Cédula de Vecindad deteriorada a nombre de la señora Labraña, al igual que la primera tarjeta, una agenda de color negro con datos varios y documentos varios, una mochila color verde, café y negro, conteniendo en su interior ropa y artículos de uso personal un pasaporte, un par de zapatos color negro marca lacoste y factura de compra de los mismas, un teléfono celular marca Nokia, color gris, una media tipo calcetín, color negro derecho, el cual llevaba puesta la señora Labraña en su pie derecho, una media tipo calcetín, color negro derecho, el cual llevaba puesta la señora Labraña en su pie izquierdo y una cartera de color negro de colgar...". (Sic).

II) RECURSO INTERPUESTO.

En cuanto a las motivos invocados, el agente fiscal en relación a la "Falta de fundamentación de la sentencia por haberse omitido la consideración de prueba decisiva introducida en el debate y ser incongruente la sentencia con la acusación y el auto de apertura", expresó en síntesis lo siguiente: "...considera que usted Honorable Juez omitió la valoración de la prueba decisiva que fue Introducida legalmente en la Vista Pública y es que la prueba cuya valoración omitió es el secuestro ofrecido en el respectivo dictamen de acusación y que fuera

admitido en el auto de apertura a juicio por el señor Juez Especializado de Instrucción de San Miguel Así mismo se refirió al auto de ratificación de secuestro aún y cuando ello nunca fue contradicho por las partes, ni mucho menos objeto de debate, dejando a un lado la valoración del secuestro ofertada debidamente por esta representación fiscal en el respectivo dictamen de acusación y debidamente admitido por el *Juez Especializado de Instrucción de San Miguel en el auto de apertura a juicio, el cual usted dejó de valorar alegando que no se había ofrecido como prueba dicho auto de ratificación de evidencias, ni mucho menos su autenticidad. dichas aseveraciones hacen que su decisión carezca de la debida fundamentación legal, al abarcar aspectos que no fueron introducidos al debate, ni contradichos. En ese sentido el juzgador omitió también la valoración del acta de captura que fuera debidamente ofrecida y admitida en el curso del proceso penal, en la. que se detalla la forma en que fueron debidamente fijadas las evidencias por el técnico JUAN CARLOS MORALES SANTANA en el momento de la captura de la imputada, así como el resto de evidencias secuestradas en flagrancia, a las que restó interés en valorarlas a pesar que., fueron legalmente admitidas, tal y como se ha quedado evidenciado en el auto de apertura a juicio al haberse admitido como prueba el acta de captura documentada a las doce horas con diez minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil nueve...". (Sic).*

En relación al motivo nominado como **"Falta de fundamentación de la sentencia por haberse inobservado en el fallo las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo"**, manifestó lo subsecuente: *"...Ha quedado en evidencia la falta de análisis y valoración por parte del Juez Sentenciador de la declaración indagatoria rendida por la imputada en Sede judicial en la que ésta alegó tener una Sociedad Anónima, ser comerciante y trasladar dinero oculto entre sus ropas por motivos de seguridad De igual manera omitió por parte del Juzgador el valorar tanto el acta de captura como el testimonio rendido por el agente captor ERICK BURGOS VILLALTA, quien fue conteste y espontáneo en manifestar que la imputada LUZ AMELIA LABRAÑA CARRILLO, le había ofrecido entregarles todo el dinero a cambio que la dejaran ir. La violación a las reglas de la sana crítica radica, en que si ese dinero había sido fruto del esfuerzo para ser invertido en negocios lícitos, cómo es posible que se ofrezca a la autoridad debidamente acreditada can sus distintivos de pertenecer a la Policía Nacional Civil la entrega de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES EN EFECTIVO, a cambio de su libertad Ese comportamiento al*

ser valorado bajo las reglas de la lógica y experiencia hace doble el considerar que su ofrecimiento o soborno, no fue por motivos de seguridad, sino que ese actuar es un fuerte indicio que el dinero transportado oculto por la imputada nunca le perteneció y que ella conocía su origen ilícito. Finalmente es dable el considerar que no se puede alegar motivos de seguridad para transportar esa fuerte cantidad de dinero de la forma en que la llevaba la imputada, asumiendo motivos de seguridad La lógica y la experiencia nos indican que si ése fuera Motivo (seguridad) su forma de traslado no sería ésa, sino la utilización de otros medios cambiarias o títulos valores...".

Finalmente, cuando invoca la "Errónea aplicación del Art. 5 literal 'a' de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos": al respecto, indicó lo siguiente: *"mal Juez Sentenciador ha incurrido en una errónea aplicación (...) por haber absuelto a la imputada baja el argumento de atipicidad por no ser la conducta exteriorizada por la imputada, consistente en la ocultación de grandes cantidades de dinero en efectivo y su consecuente movimiento de un país hacia otro, delito y consecuencia de ello ser una conducta que no se encuentra sancionada por dicha ley especial es decir es atípica. De igual manera su sentencia ha dejado en evidencia su errónea aplicación de la mencionado por dicha ley especial referente a su procedencia directa o indirectamente de actividades delictivas, como si el tipo penal se refiriese a las formas de probar en el juicio mediante prueba directa o indirecta, cuando el tipo penal no puede ni debe ser entendido de esa manera, pues no lleva imbíbido las formas de probar ni sus medias, par ser competencia del derecho adjetivo en el que se encuentran establecidas los medias de prueba autorizados. Esa aplicación es errónea a todas luces, par el argumento antes expuesto y porque además la relación directa o indirecta de los fondos bienes y derechos, se refiere a que éstos deriven, procedan o se encuentren relacionados de forma directa con el que cometió el hecho delictiva o indirectamente con el sujeto activo o partícipe del delito generador. Pues nos encontramos ante un delito de crimen organizado en este caso en concreto, en el que según la experiencia jurisprudencial los que cometen el delito generador tratan de desligarse completamente de su responsabilidad legal utilizando a otras personas (mulas de efectivo) para que puedan trasladar esas ganancias generadas hacia otras jurisdicciones en las que les es posible asegurar su ingreso al sistema financiero y lograr de esa forma el disfrute del procuro logrado, es decir que la sala ocultación del dinero es un indicio que el mismo proviene*

indirectamente de una actividad delictiva. Otro aspecto importante es que en su sentencia usted pretende que esta representación fiscal le haga llegar, es lo relacionado a circunstancias ajenas a las exigidas por el tipo penal pues el legislador ha sancionado la ocultación en cualquier forma del origen, destino o el movimiento de ese dinero como delito de casos especiales de Lavado de Dinero y de Activos. Finalmente dicha atipicidad, aparte de ser errónea, deja en evidencia ciertas incongruencias que atentan contra el principio de fundamentación de las resoluciones judiciales y consecuentemente ser incongruente, pues en un inicio se refirió a que el motivo de la absolución es por atipicidad y posteriormente enunciar que no se probó que el dinero 'oculto' se encuentre vinculado a delitos, por lo que su razonamiento es Incongruente al referirse a medios de prueba que no hicieron posible convencerle acerca de la antijuricidad y posterior culpabilidad de la imputada al exigir mayores elementos o datos probatorios que robustecieran la acusación fiscal dejando de lado la atipicidad (Sic). Finalmente, el recurrente pide se case la sentencia y se ordene el reenvío, para la celebración de una nueva vista pública donde conozca un juez diferente.

III) EN CUANTO AL EMPLAZAMIENTO.

El Defensor Particular, Licenciado William Ulises Cruz Bernal, al contestar el emplazamiento refirió en lo medular, lo subsecuente: "*...Que se argumenta por parte del Ministerio Público Fiscal que el Honorable señor Juez de Sentencia Especializada de San Miguel ha omitido fundamentar su sentencia, lo cual a la luz de la verdad real no es cierto, ya que podrá la Honorable Sala verificar que en efecto la sentencia pronunciada por el Señor Juez Especializado de San Miguel de fecha siete de octubre se encuentra debidamente fundamentada, advirtiendo esta defensa que al contrario la representación fiscal impetró en su recurso sin haber realizado una detenida lectura de la sentencia a la que me refiero, ya que en la parte referente a la descripción de la prueba emitida en la referida sentencia establece haber valorado la depuesta por los testigos captados ERICK BURGOS VILLALTA e ISIDRO SALOMÉ VILLALOBOS GARCIA quienes en lo medular manifestaron elementos del momento de la detención de mi patrocinada, no habiendo aportado mayor información sobre la adquisición o tenencia del dinero incautado, habiendo manifestado el señor ERICK BURGOS VILLALTA que Él no sabía si el dinero incautado procedía o no de un ilícito, y por su parte el agente ISIDRO SALOME VILLALOBOS GARCIA, que él no sabe si el dinero incautado a mi defendida será procedente de un delito o no...*". (Sic). Finalmente, el emplazado

pide se declare sin lugar la solicitud del ministerio fiscal y se confirme la sentencia absolutoria pronunciada a favor de su defendida.

IV) CONSIDERACIONES DE ESTA SALA.

Antes de resolver lo esbozado por el recurrente, este Tribunal estima adecuado aclarar que en el presente recurso se invocan tres motivos de casación: dos de forma y uno de fondo; por consiguiente, esta Sala identifica que en el caso particular de los motivos *In procedendo* éstos tienen una misma línea de pensamiento, en el sentido de atacar la fundamentación de la sentencia, razón por la cual se analizarán bajo un mismo acápite y de forma prioritaria, puesta que de existir tal error, éste afectaría la validez de la sentencia, tomándose innecesaria el pronunciamiento respecto del motivo *in iudicando*.

En términos básicos, la fundamentación del impugnante está encaminada a demostrar la falta de fundamentación de la sentencia, ya que en su opinión el sentenciador incumplió con el deber de motivación que le manda la ley, omitiendo la estimación de elementos probatorios de carácter decisivo, inobservando par tanto las reglas de la sana crítica.

En lo tocante al defecto impugnada, este Tribunal considera que es primordial esbozar algunos aspectos relativos a la fundamentación de la sentencia. Antes que nada, corresponde establecer que el requerimiento que los fallos sean fundados es una obligación constitucional, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha derivado de la conjunción de otros derechos, como el debido proceso, el derecho a recurrir, derecho de audiencia, etc.

El motivo que justifica la importancia que el juez plasme en sus fallos sus explicaciones, radica en restringir la emisión de decisiones contrarias a derecho, imponiéndole a los jueces que justifiquen y argumenten sus decisiones; así mismo, como contrapartida, se habilita a los agraviados de tales resoluciones, la facultad de recurrir ante un tribunal superior para la revisión integral del fallo; cabe mencionarse que éste último derecho ha sido introducido, en virtud de la aprobación de ciertos instrumentos internacionales, Vgr., Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Art. 8, señala el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en los Arts. 9.4 y 14.5, elevan el derecho a recurrir únicamente para las personas privadas de libertad en un proceso penal; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en los Arts. 8.2 h, 7.6 y 25, se refieren al derecho de recurrir de los inculpados de un delito y los privados de libertad; y a la obligación positiva del Estado de conceder un

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales de las personas.

De la interpretación de los preceptos citados, en específico de los Arts. 8.2 h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede inferirse el alto reconocimiento que tiene el derecho a recurrir ante la emisión de sentencias arbitrarias o carentes de motivación; ante lo cual actualmente, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal vigente, solo cabe la interposición del recurso de casación (Arts. 421 y sig. Pr.Pn.).

Conviene ahora, explicar algunos aspectos generales concernientes al defecto de falta de fundamentación de la sentencia -punto discutida arduamente por el recurrente-; en doctrina se ha establecido que la función motivadora de una sentencia tiene una serie de etapas, que en caso que el juez las omita o las realice de manera exigua, incurre en el vicio sujeto a análisis. Así, de acuerdo a los autores ARROYO GUTIÉRREZ, J., RODRÍGUEZ CAMPOS, A., en su obra "Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal", P. 97, Poder Judicial-Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002, son cuatro los momentos principales en que se hace necesario aplicar la actividad motivadora: *"(a) aquél en que se expresan resumidamente los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentarán descriptiva; (b) aquél en que se procede a determinar la plataforma fáctico (hechos probados): fundamentarán fáctico; (c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentarán analítica e intelectual; y (d) aquél en que se realiza la tarea, de adecuar -o no- el presupuesto de hecho al presupuesto normativo: fundamentarán jurídica..."*. (Sic).

De ahí, que si un juzgador en cualquiera de estos momentos no explique o justifique su decisión en forma debida: es decir, cumpliendo con los requerimientos esenciales, como el que sus argumentaciones sean expresas, claras, completos, legítimos y lógicos, incurrirá en el defecto de falta de fundamentación de la sentencia.

De acuerdo al estudio efectuado en el fallo pronunciado por el Juez Especializado de Sentencia de San Miguel, se obtiene como resultado, que los elementos probatorios que inmedió en audiencia de Vista Pública, fueron los siguientes:

PRUEBA DOCUMENTAL de cargo: Acta policial de detención, levantada en el interior del Edificio denominado Jesús Aguilar Arriaga, de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, a las doce horas con diez minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil nueve, en la que se deja constancia de la detención en flagrancia de Luz Amelia

Labraña Carrillo, por atribuírsele el delito de Casos Especiales de Lavada de Dinero y Activos, así mismo se deja constancia del secuestro de las evidencias encontradas; **de descargo: 1.** Acta notarial, levantada en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día treinta de julio del año dos mil nueve, ante los oficios de René Eric Iraheta Grimaldi, notario, del domicilio de San Salvador, en la que se hace constar que Claudia Fabiola Gámez Rivera, de treinta y seis años de edad, comerciante, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de Mazatenango, República de Guatemala, bajo juramento declaró: Que el día veintiuno de mayo del presente año, le entregó a la señora Luz Amelia Labraña Carrillo, la cantidad de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América, los cuales utilizaría para la compra en la República de Panamá, de mercancías como: carteras, sandalias, curiosidades, ropa interior y lentes para posteriormente ser comercializados en la República de Guatemala; y **2.** Documento Legal, otorgado ante las oficios del Licenciado Ermi Donerik Villagrán Benítez, en la ciudad y municipio de San Juan Bautista del Departamento de Suchitepéquez, República de Guatemala, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, por la señora Claudia Fabiola Gómez de León, a favor del señor José Mejía García.

PRUEBA TESTIMONIAL: Erick Burgos Villalta e Isidro Salomé Villalobos García, ambas en calidad de Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, manifestando el agente Burgos Villalta, en lo medular lo siguiente: *'...que al llegar al final del autobús cuando le tocó registrar una señora de nacionalidad guatemalteca la notó muy amable y eso le dio sospechas, que le pidió su pasaporte y le dijo que iba hacia Costa Rica, que ésta también le manifestó que era comerciante, que iba por tres días, que según su pasaporte respondía al nombre de Luz Amelia Labraña Carrillo, que le preguntó si llevaba maletas, que sólo llevaba una cartera color negro, que luego se dio otra sospecha porque al revisar la cartera notó algo extraño, que los objetos personales eran pocos y la cartera muy gruesa y pesada, que ante eso introdujo su mano y tocó que había algo dentro del forro y logró observar cierta cantidad de dinero, que le preguntó a ella y le dijo que iba a comprar y se iba a regresar en tres días, que luego bajó con ella para que la registrara una compañera del sexo femenino, que luego su compañero observó que en sus pies se veía abultado, y luego ella se levantó el pantalón y pudo observar que en una media llevaba una exagerada cantidad de billetes de dólares americanos 1..) que después ella estaba bien nerviosa y les dijo que la dejaran ir, que estaba dispuesta a darles todo el dinero, que eso fue en el parqueo*

del Amatillo...". (Sic).

De modo que, luego de haberse analizado la sentencia objeto de estudio, específicamente la parte relativa a la valoración de prueba, se constata que el juzgador tuvo por acreditado el siguiente hecho: ***“LA REPRESENTACION FISCAL EN SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SE PRONUNCIÓ Y POSTERIORMENTE ACUSO POR EL DELITO DE CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, tipificado y sancionado en el artículo cinco de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO. Hecho que este juzgador NO TIENE POR ACREDITADO, afirmo esto porque a través de la prueba vertida en juicio, únicamente se ha acreditado que el día veintinueve de mayo de/año dos mil nueve, aproximadamente a las seis horas con treinta y cinco minutos, en el Recinto Aduanal de la Frontera El Amatillo, ubicada en Cantón Santa Clara, Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión, en momentos en que los Agentes pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil EMIR ISAAC RIVERA VILLANUEVA, ERICK BURGOS VILLALTA e ISIDRO SALOMÉ VILLALOBOS, efectuaban la revisión rutinaria del autobús placas número AB SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, de la empresa KING QUALITY, procedente de Guatemala, con destino a la República de Costa Rica, el agente Erick Burgos Villalta subió al referido autobús y solicitó autorización para realizar registro dentro del misma, el cual fue autorizado por el conductor, por lo que al proceder al registro específicamente en el asiento número treinta y una treinta y dos, lugar donde se transportaba LUZ AMELIA MORA CARRILLO, de nacionalidad guatemalteca, se procedió al registro de su equipaje de mano resultando que dentro de una cartera color negro, con el forro interior roto se observaba una cantidad Indeterminada de dinero en billetes de veinte dólares, por lo que el agente Burgos le solicitó que se bajara del autobús, luego ya estando fuera del autobús, al percatarse el agente Villalobos García que a la altura de sus pantorrillas éste portaba algo anormal le preguntó si andaba adherida dinero a su cuerpo por lo que LUZ AMELIA LABRAÑA CARRILLO, de inmediato se subió el pantalón y alrededor de sus botines transportaba una cantidad indeterminada de dinero, en cada pie, sujetada medias tipo calcetín, siendo que en ese momento la pasajero ofreció toda el dinero a cambio de su libertad, por lo que los agentes Erick Burgos y el Cabo Rivera la conducen hasta el punto de inspecciones ubicado en Frontera El Amatillo, lugar donde Luz Amelia***

Labraña Carrillo, voluntariamente se subió el pantalón del lado derecho y luego se quitó la media y se sacó cinco paquetes de billetes de la denominación de veinte dólares y se lo entregó al Cabo Villanueva, realizando la misma acción con el lado izquierdo de su pantalón, entregándole otros cinco paquetes de billetes de la misma denominación; luego de la cartera que le había sido registrada inicialmente también se encontró una cantidad Indeterminada de billetes de veinte dólares; siendo que posteriormente los agentes se dirigen junto con Luz Amelia Labraña, a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, con Sede en San Salvador, con el objeto de entregar las evidencias, las cuales al ser recibidas y contabilizadas por el técnico Juan Carlos Morales Santana, dieran como resultado total la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES".
(Sic) El subrayado es de la Sala.

Como resultado de tal examen, este Tribunal es de la opinión que el sentenciador ha incurrido en un defecto en el ejercicio de su inferencia jurídica penal; en efecto, al intentar establecer el proceso lógico desarrollado por el juzgador, nos encontramos ante ciertas argumentos que imposibilitan determinar ese recorrido transitado por el *A Quo* para emitir una sentencia absolutoria a favor de la imputada Labraña Carrillo.

Así, en una parte de la sentencia se afirma que no se tiene por acreditada la tesis de la Fiscalía General de la República, por el delito de Casas Especiales de Lavado de Dinero y Activos; sin embargo, tal como se constata en el párrafo anterior, como secuela de una extrapolación de la apreciación de los elementos probatorios en su conjunto, el mismo juzgador formula su hipótesis de los hechos probados, la cual es muy coincidente con la planteada por la representación fiscal, cuestión que hace inconcebible la decisión de absolución emitida por el juzgador: por tal motivo, esta Sala al analizar profundamente la sentencia de mérito, comprueba que el error en el razonamiento del juzgador no sólo se localiza en la motivación intelectual sino que también como una consecuencia directa, ha incidido de sobremanera en la fundamentación jurídica del fallo.

Cabe añadir en este punto, tal como se mencionó *ab initio*, toda motivación sea cual fuere la etapa en la que se encuentre el juez en su sentencia (fáctica, descriptiva, intelectual o jurídica), corresponde cumplir con ciertos principios generales así como sus características: claridad, coherencia y suficiencia. Es más, en el caso específico de la motivación jurídica, ésta debe permitir conocer el porqué el juzgador utiliza determinada solución sustantiva; cuestión

imposible en el presente caso, ya que al tomar en cuenta todos los elementos probatorios inmediatos por el juzgador en la audiencia de Vista Pública: así como los hechos acreditados por el mismo, hace incompatible e incongruente la decisión de una absolución por estimar atípica la conducta de la encartada.

Así pues, es evidente que el *A Quo no* logró justificar desde un punto de vista lógico jurídico la posición que lo condujo a dictar la absolutoria impugnada. En primer lugar, porque la conducta realizada por la imputada Labraña Carrillo, consistente en la ocultación de cuarenta y cinco mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América en su cuerpo y objetos de carácter personal, posee una gran probabilidad de ser típica penalmente; no obstante, esta situación no pudo fijarse en el fallo, en vista que el sentenciador no consumó su examen en cuanto a los restantes elementos de la teoría jurídica del delito; decantándose por una atipicidad, deducción que no es derivada de los elementos probatorios, incorporados y discutidos en este proceso.

Precisamente en razón de lo anterior, es que esta Sala considera que las ideas desarrolladas para el juzgador se oponen entre sí e impiden controlar el iter lógico del fallo, existiendo una ruptura que hace insostenible derivar sus conclusiones de acuerdo a todos los elementos de prueba y marco fáctico planteado: en consecuencia, el defecto de falta de fundamentación es procedente, en cuanto a que los razonamientos esenciales en que se apoya el fallo bajo análisis son arbitrarios, al violar los principios de derivación y razón suficiente. De acuerdo con lo expuesto por el juzgador, surgieran tesis adversas que oscurecen la obtención de la verdad real, *fin* inmediato de todo proceso penal, haciendo insuficiente su motivación, por cuanto su resolución no guarda concordancia con los hechos que se estimaron acreditados, al no haber deducido racionalmente todos los elementos probatorios a la norma jurídica aplicable, careciendo sus argumentos de un proceso lógico, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional.

En consecuencia, es procedente casar la sentencia de mérito por el motivo de forma invocado y anular la audiencia de Vista Pública, debiendo por tanto remitirse las actuaciones al Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, donde conocerá el juez suplente, a efecto de reponer la audiencia para la celebración de un nuevo juicio.

Con fundamento en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc.2 No.1, 131 357, 361, 421, 422 y 427, todas Pr.Pn., en nombre de la República de El Salvador,

esta Sala

FALLA:

a) **CASASE** la Sentencia emitida por el Juzgado Especializada de Sentencia de San Miguel, por el motivo de forma invocado.

b) **ANÚLASE** la audiencia de Vista Pública que dio origen a la sentencia impugnada.

c) Remítase el proceso al Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, para que celebre audiencia de Vista Pública para los efectos previsto," en el presente libelo.

Notifíquese.-----R.M. FORTIN H-----M. TREJO-----GUZMAN U.D.C-----

**PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN-----
ILEGIBLE---RUBRICADAS.**